

Previsiones para las reformas en materia de inmigración dentro del nuevo clima político

La incapacidad de nuestro sistema político en la última década de aprobar una reforma en materia de inmigración nos ha dejado con un statu quo que no satisface a casi nadie. Las empresas están preocupadas por no conseguir suficientes trabajadores cualificados. Los trabajadores se quejan por tener que competir laboralmente con los recién llegados y por verse obligados a aceptar unos salarios más bajos. A los agricultores les preocupa que se tomen medidas para impedir que Estados Unidos



reciba a trabajadores temporeros. Las instituciones de educación superior están descontentas por las dificultades con las que se topan a la hora de obtener visados de estudios para los alumnos internacionales. Muchos estadounidenses están furiosos porque, debido a que las fronteras no están bien selladas, pueden entrar potenciales terroristas e inmigrantes ilegales a Estados Unidos, y porque individuos indocumentados reciben beneficios sociales y económicos en forma de educación, servicios de urgencias y asistencia pública. No obstante, otros opinan que el gobierno hace respetar la ley de un modo selectivo y crea desigualdades en la forma de tratar a los diversos grupos.

Este artículo explica cómo el nuevo clima político de Estados Unidos ofrece esperanzas para tomar medidas en el plano de la inmigración, incluso cuando su economía está en recesión. Igual que han hecho los tomadores de decisiones en otros temas políticos polémicos, como la regulación del tabaco y el control de armas, deben realizarse elecciones muy duras para reconciliar objetivos enfrentados. Las nuevas políticas federales harán necesario un nuevo estilo en materia de inmigración, ideas innovadoras y gran decisión para superar los principales obstáculos.

La cantidad creciente de inmigrantes latinos de la nación (en la actualidad el 15% de la población estadounidense) refutará cada vez más la idea de fomentar unos controles fronterizos más estrictos y las redadas en los lugares de trabajo. Algunos cambios recientes en las posturas en materia de inmigración, como por ejemplo el anuncio por parte de los sindicatos de que están dispuestos a llegar a un compromiso, también vuelven más optimista el panorama. A pesar de los indicios esperanzadores, la inmigración todavía conlleva ciertos obstáculos económicos, sociales, políticos y culturales que deben ser superados si deseamos que las reformas del congreso sean eficaces.

Antecedentes

La ley de Fronteras Seguras, Oportunidades Económicas y Reforma de la Inmigración del 2007, un acuerdo muy apoyado por el presidente del momento, fracasó cuando los legisladores no pudieron resolver las diferencias políticas entre los distintos distritos electorales. Dentro del partido del presidente Bush, sólo 11 de sus 49 miembros apoyaron su postura en el voto de clausura fundamental en el Senado, 12 menos que los que habían respaldado una medida similar el año anterior. En sus dos últimos años de gobierno, los líderes Republicanos de la Cámara ignoraron a su presidente y se negaron a llevar al hemisferio otra cosa que no fueran medidas punitivas. Las discusiones acerca de la inmigración se quedaban estancadas en el impacto real y potencial que tenían los recién llegados en la vida económica y social de Estados Unidos. Como esta cuestión toca temas delicados como la familia, la educación, el orden social, el suministro de servicios, la cultura, el idioma y la identidad nacional, a los dirigentes les resulta difícil tender un puente entre puntos de vista enfrentados. La legislación fracasó por culpa de la polarización de las instituciones, la combativa cobertura por parte de los medios de comunicación, la compleja y cambiante opinión pública y los retos reales que supone el reforzamiento de las fronteras.

"Las nuevas políticas federales harán necesario un nuevo estilo en materia de inmigración, ideas innovadoras y gran decisión para superar los principales obstáculos."

El nuevo panorama

La reforma de la inmigración en el nuevo panorama político vendrá determinada por un popular presidente Demócrata armado con unas mayorías Demócratas sustanciales en la Cámara y en el Senado. No obstante, un control unificado del gobierno nacional por parte del partido no garantiza que se tomen decisiones globales y exhaustivas. Los Demócratas controlaban el Congreso y la presidencia durante la administración Carter pero no fueron capaces de reformar las políticas en materia de energía. Durante la administración Clinton, los Demócratas estaban en una posición fuerte parecida,

pero no pudieron implementar la piedra angular de la agenda nacional del presidente: la reforma de la sanidad.

Aun así, en aquellos temas controvertidos que hacen necesario un compromiso intrincado, es útil tener un partido que esté claramente al mando. Esta posición institucional facilita la negociación de las diferencias políticas porque reduce la cantidad de principios a negociar. Dicha dinámica se da especialmente en periodos de polarización extrema, como el presenciado en los últimos años. Con cada uno de los partidos buscando una ventaja electoral y los más extremistas de ellos solicitando respuestas ideológicamente puras, es difícil aprobar medidas completas. Los temas polémicos, como por ejemplo la reforma de la inmigración, requieren cierto apoyo dentro del partido de la oposición para contrarrestar la baja de aquellos miembros del partido mayoritario que pudieran desertar ante las presiones enfrentadas. Los obstáculos por la mayoría calificada dentro del Senado, así como el obstruccionismo, también hacen necesario las negociaciones dentro del partido.

El nuevo clima facilita las reformas porque se le presta una atención renovada a las grandes ideas y a las acciones políticas arriesgadas. Las elecciones del 2008 tuvieron lugar con un telón de fondo de recesión mundial, instituciones financieras inestables y una fuerte sensación entre el público americano de que los viejos enfoques políticos estaban fracasando y era necesario buscar otros nuevos. En una encuesta nacional de la CBS/*New York Times* de octubre del 2008 se decía que sólo el 7% de los americanos pensaban que el país iba en la dirección correcta, mientras que el 89% opinaba que iba muy desencaminado. Después de los primeros cien días del Presidente Obama, ese 7% había aumentado hasta casi un 50%.

Ante el descontento masivo de los ciudadanos y gozando de amplias mayorías, el Presidente Obama ha prometido un nuevo camino político en áreas que van desde la regulación financiera y la educación hasta la sanidad y la energía. Como refleja la Ley de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos del 2009, existe la voluntad de tratar temas difíciles y buscar nuevos enfoques políticos. En su discurso inaugural, Obama prometió cambiar la situación actual. Apuntando que los críticos se habían quejado de que tenía “demasiados grandes planes”, el Presidente respondió que “las cosas han cambiado” y que es el momento de actuar.

En lo referente a la reforma de la inmigración, Obama ha expresado su apoyo a una legislación completa. En una reunión

"La reforma de la inmigración en el nuevo panorama político vendrá determinada por un popular presidente Demócrata armado con unas mayorías Demócratas sustanciales en la Cámara y en el Senado. No obstante, un control unificado del gobierno nacional por parte del partido no garantiza que se tomen decisiones globales y exhaustivas."

municipal el 18 de marzo en Costa Mesa, California, dijo: "Sé que se trata de un tema emotivo. Sé que es un tema controvertido. Sé que la gente se irrita mucho políticamente por este tema, pero en última instancia esto es lo que yo opino: Somos una nación de inmigrantes... No creo que podamos hacer esto si no es de un modo sistemático." Durante su rueda de prensa del 29 de abril, el presidente reiteró su deseo de hacer avanzar el proceso, diciendo que "No podemos seguir con un sistema de inmigración tan irregular. No es positivo para nadie. No es positivo para los trabajadores americanos. Es arriesgado para los posibles trabajadores mexicanos que intentan cruzar una frontera muy peligrosa."

Con unos líderes experimentados dirigiendo los departamentos fundamentales, la administración Obama está bien situada para conseguir una reforma de la inmigración. Por ejemplo, la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, es una exgobernadora de Arizona que aporta conocimientos detallados en materia de inmigración y grandes habilidades políticas. El Secretario de Comercio, Gary Locke, es un estadounidense de ascendencia asiática que fue gobernador de Washington, un estado con una inmigración considerable, en especial de procedencia asiática.

Los principales líderes del Congreso parecen comprometidos a actuar en materia de inmigración. En un mitin reciente en San Francisco, la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (D-Calif.) se quejó de las redadas dirigidas hacia los inmigrantes ilegales. "¿Quién en este país no querría cambiar una política que consiste en aporrear puertas en medio de la noche y en mandar a un padre lejos de su familia?" Dijo que había instado a Obama para que "detuviera las redadas y las deportaciones equivocadas que están separando a matrimonios, niños y familias". Y el Líder de la Mayoría del Senado, Harry M. Reid (D-Nev.) lleva tiempo apoyando la ley propuesta para el Desarrollo, la Ayuda y la Educación de Menores Extranjeros (conocida como DREAM por sus siglas en inglés) y otras iniciativas que permitirían a "estudiantes que llevan viviendo en el país desde los quince años solicitar la residencia legal con condiciones después de graduarse en el instituto". Al mismo tiempo, ambos son realistas en lo referente a las preocupaciones que albergan algunos miembros de su propio partido en cuanto a la reforma de la inmigración y a la necesidad de encontrar respuestas aceptables para ambas partes ante esas dudas tan legítimas.

Una fuerza latina creciente

Otro factor que favorece las reformas es la demografía cambiante del electorado americano. A nivel nacional, los latinos componen el 15% de la población, mientras que en el año 2000 suponían un 12%. El grupo de personas hispanas, que consta de 46 millones de personas, constituye una fuerza política en alza. Esto es así especialmente ya que los hispanos se concentran en varios estados fundamentales. Componen el 44% de la población de Nuevo México, el 36% de California y Texas, el 30% de Arizona y el 25% de Nevada.

Los hispanos fueron fundamentales para la victoria del Presidente Obama en el 2008. En los sondeos finales de la noche de las elecciones, se calculó que un 67% de los hispanos votaron a Obama, por oposición al 32% que votaron al Republicano John McCain. Esto representaba una mejora de 8 puntos porcentuales en comparación con el 2004, cuando el Demócrata John Kerry obtuvo el 59% de sus votos a nivel nacional, por oposición del 40% del Republicano George W. Bush.

Este cambio puede atribuirse en cambio a la estridente retórica del Partido Republicano contra la inmigración ilegal y a favor de unos controles fronterizos más estrictos y de las redadas en los puestos de trabajo. Los Republicanos conservadores se han hecho oír especialmente en los temas de seguridad y cumplimiento de la ley, y algunos hispanos consideran que ese partido es contrario a sus intereses.

Como los hispanos se agrupan en ciertos estados fundamentales y se han mantenido indecisos en varios distritos, tienen una influencia política desproporcionada en relación con su tamaño real. En varios estados, la proporción de votos hispanos que recibió Obama excedía con mucho su margen de victoria total. Por ejemplo, Obama ganó en Colorado por 7 puntos porcentuales, mientras que un 12% de los hispanos votaron a Obama. Ganó en Florida por dos puntos y tuvo un margen de casi ocho puntos sobre McCain entre los hispanos de ese estado. Asimismo, en Nevada y Nuevo México su margen entre los votantes hispanos superó sus votos totales sobre McCain.

Es probable que los hispanos sean cruciales en algunas elecciones parlamentarias muy competitivas del 2010, tanto en el sur como en el oeste. El hecho de apoyar una reforma completa en materia de inmigración en el Congreso está directamente relacionado con la cantidad de población hispana en el estado o distrito de cada senador o representante. A medida que los hispanos se vuelvan más activos políticamente, serán incluso más fundamentales para que las coaliciones electorales tengan éxito. El Departamento del Censo de Estados Unidos calcula que en el 2030 los latinos compondrán el 20% de la población americana. Y en el 2050, serán casi una cuarta parte de la población total de Estados Unidos.

Cambios en las posturas de los grupos fundamentales

Algo que condenaba al fracaso a muchos viejos intentos de realizar una reforma en materia de inmigración ha sido que los

"Los datos más recientes del 2009 de una encuesta del Centro de Investigación Pew demuestran que casi dos tercios (un 63%) de los americanos están a favor de una 'vía hacia la ciudadanía' para los inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos si superan una revisión de sus antecedentes, pagan una multa y tienen trabajo."

grupos fundamentales no han estado dispuestos a llegar a ningún compromiso aceptable para ambas partes. Las políticas de inmigración despiertan unos sentimientos muy fuertes en muchas personas, y ha sido difícil conseguir que las organizaciones principales negociaran y se comprometieran en algunas cuestiones importantes.

Los primeros signos de cambio que se están presenciando en las posturas en cuestión de inmigración de las organizaciones fundamentales son buena señal. Por ejemplo, históricamente los sindicatos se han mostrado poco entusiastas en relación con la reforma de la inmigración porque algunos de sus miembros consideran que los recién llegados hacen que sea más difícil acceder a un puesto de trabajo y que los salarios sean más bajos. No obstante, recientemente dos sindicatos, la AFL-CIO y Change to Win, han anunciado que están dispuestos a aceptar algunas disposiciones que anteriormente les resultaban odiosas. En abril del 2009, las federaciones revelaron públicamente que aceptarían a futuros trabajadores extranjeros, un escollo fundamental en pasadas discusiones, si una comisión de inmigración independiente implementaba programas de trabajadores temporales adaptados a las condiciones económicas. En la actualidad el Congreso está tomando decisiones sobre la envergadura del programa de trabajadores temporales, y sus acciones no se han calibrado en función del aumento o la disminución de la oferta laboral. No obstante, mediante dicho acuerdo estas federaciones expresaron su voluntad de comprometerse, una muestra clave de receptividad ante los cambios fundamentales.

Cambios en la opinión pública

Los americanos llevan mucho tiempo manteniendo unas actitudes complicadas en relación con la inmigración. Un análisis del 2008 de encuestas recientes de opinión pública nacional de Gallup realizado por E.J. Dionne Jr. para un informe de Brookings titulado "Democracy in the Age of New Media: A Report on the Media and the Immigration Debate" descubrió que, del 2001 al 2007, la mayoría de los americanos consideraban que la inmigración era algo positivo para el país. El porcentaje de ciudadanos que compartían esta opinión disminuyó después del 11 de septiembre y de nuevo en el 2007 durante el debate nacional acerca de la reforma de la inmigración. No obstante, incluso con el polémico debate que se mantuvo en el congreso, el 60% de los americanos consideraban que era algo positivo. Por grupo étnico, el 74% de los hispanos pensaban que la inmigración era positiva, en comparación con el 59% de los blancos no hispanos y el 55% de los afroamericanos.

Los datos más recientes del 2009 de una encuesta del Centro de Investigación Pew demuestran que casi dos tercios (un 63%) de los americanos están a favor de una "vía hacia la ciudadanía" para los inmigrantes ilegales que viven en Estados Unidos

si superan una revisión de sus antecedentes, pagan una multa y tienen trabajo. El apoyo a la legalización es más consistente entre los jóvenes de 18 a 29 años (un 71%) y disminuye entre los residentes de mayor edad. El 67% de los ciudadanos de 30 a 49 años está a favor de la legalización, en comparación con el 62% de los ciudadanos de 50 a 64 años y el 48% de los mayores de 65 años.

No obstante, la mayoría de los habitantes de Estados Unidos no desean abrir mucho más las fronteras. Una encuesta de Gallup del 2007 descubrió que el 45% querían reducir la inmigración, el 35% consideraban que debería mantenerse en los niveles actuales y sólo el 16% pensaban que debería aumentar. Si miramos esos puntos de vista del 1965 al 2007, ha tenido lugar una disminución en picado del porcentaje de personas que opinan que la inmigración debería aumentar. El punto álgido de esta actitud tuvo lugar durante los malos años económicos de principios de los años noventa, cuando casi dos tercios de los americanos pensaban así. No obstante, estas cifras cayeron a finales de esa década, aumentaron ligeramente después del 11 de septiembre, y se colocaron en un 40% en el 2006 y en un 45% en el 2007.

Es probable que la debacle financiera y la recesión acentúen ese sentimiento negativo temporalmente, pero las bases históricas indican que la oposición a la inmigración menguará a medida que se vaya recuperando la economía.

En lo referente al país de origen, la oposición pública a la inmigración más importante en el 2006 era la relativa a la inmigración originaria de países latinoamericanos. Un 48% de los encuestados sentían que venían demasiados inmigrantes de esa región, en comparación con un 39% que pensaba lo mismo de los provenientes de las naciones árabes, un 31% que dijo lo mismo en relación con tierras asiáticas y un 20% que opinaba que llegaban demasiadas personas de Europa.

A pesar de estos puntos de vista, la inmigración no está entre los problemas más importantes de Estados Unidos según las percepciones de sus habitantes. Por ejemplo, en el 2008 sólo el 4% de los encuestados en una serie de preguntas abiertas opinaron que la inmigración era el problema más importante del país. De hecho, el único momento desde 1997 en el que esa proporción aumentó fue en el 2006, durante el último debate sobre la inmigración en el Congreso. En ese momento, el 19% de los encuestados consideraban que era el problema más importante. Al fracasar el proyecto de ley, volvió a bajar hasta cifras de un único dígito. Cuando en una encuesta de enero del 2009 realizada por el Centro de Investigación Pew se preguntó cuáles deberían ser las prioridades del país, la inmigración quedó en 17º lugar de los veinte temas políticos enumerados. Un 41% consideraba que la inmigración debería ser una prioridad importante, mientras que un 85% escogió la economía, un 82% eligió el empleo y un 76% mencionó el terrorismo.

Las entradas legales han disminuido mucho

En el último año ha tenido lugar una espectacular disminución de la inmigración ilegal, lo cual podría tranquilizar al público americano. Las estadísticas reunidas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos revelan que las entradas ilegales han caído hasta una mínima histórica en los últimos treinta años debido a un mejor cumplimiento de la ley y a los problemas de la actual economía americana. La cantidad de inmigrantes ilegales capturados fue de 1,7 millones a mediados de los años ochenta, 1 millón a finales de esa década, 1,6 millones en el año 2000, y 705.000 en el 2008. Esta última cifra fue la menor cantidad de detenciones desde que en 1976 se arrestara a 675.000 personas. Desde el 2006, se añadieron 6.000 agentes a las patrullas fronterizas de la frontera con México y se construyeron 526 millas de valla para reforzar la seguridad.

Durante la campaña electoral del 2008, un sondeo del *Washington Post/ABC News* preguntó a los votantes cómo de importantes eran una serie de temas. El 63% de los encuestados dijo que la inmigración era importante para su decisión de voto, en comparación con un 92% que pensaba lo mismo de la economía, un 83% que escogió la guerra de Irak, un 81% que mencionó la educación, un 78% que eligió la sanidad, un 70% que citó los impuestos, un 58% que se decantó por el calentamiento global, un 50% que dijo que el control de armas y un 39% que opinaba lo mismo de problemas sociales como el aborto y las uniones entre personas homosexuales.

En base a este análisis de los datos de opinión, Dionne concluyó que "los americanos están a favor de los inmigrantes ideológicamente pero en cuestiones prácticas están a favor de imponer ciertas restricciones". Para documentar ese punto, un estudio nacional de Democracy Corps descubrió que los estadounidenses distinguen distintos tipos de situaciones en las que deben garantizarse dichas restricciones. Cuando se les preguntó si estaban a favor de alguna medida concreta, un 80% apoyó un mejor cumplimiento de la ley para que las empresas no contraten a trabajadores ilegales, un 77% dijo que deberíamos duplicar el número de agentes fronterizos, un 76% respaldó la implementación de un programa de trabajadores extranjeros que permita a los inmigrantes trabajar en Estados Unidos durante un periodo de tiempo establecido, un 65% opinó que deberíamos recortar algunos servicios públicos no esenciales como los programas de asistencia social para los inmigrantes ilegales, y un 64% dijo que deberíamos permitir que los inmigrantes ilegales paguen una cuota y aprendan inglés con el fin de ser candidatos para pedir la ciudadanía. Un 52% dijo que deberíamos deportar a todos los inmigrantes ilegales, y un 51% opinó que deberíamos construir una valla en la frontera entre Estados Unidos y México.

También encontramos unas distinciones similares cuando a los encuestados se les pregunta si ven con buenos ojos que los inmigrantes no autorizados se beneficien de ciertos servicios públicos. Una mayor cantidad de encuestados (un 74%) está a favor de que los hijos de inmigrantes ilegales que sean ciudadanos americanos asistan a escuelas públicas, desde el jardín de infancia hasta el instituto; un 64% están de acuerdo con que utilicen los hospitales y las urgencias; un 50% apoyan que los niños que estén en el país ilegalmente asistan a escuelas públicas hasta dejar el instituto; a un 35% les parece bien que los hijos de inmigrantes ilegales puedan matricularse en universidades públicas; un 31% están a favor de que puedan sacarse el carnet de conducir; y un 25% opinan que deberían poder acceder a Medicaid, el programa de salud del gobierno dirigido a los pobres.

Obstáculos a superar

A pesar de ciertos indicios esperanzadores, la reforma en materia de inmigración nunca será una tarea sencilla. Existen múltiples corrientes enfrentadas, tanto políticas como normativas, alrededor de este tema. El país está profundamente dividido, y por ello los dirigentes electos tienen dificultades para resolver los conflictos.

Entre los obstáculos a los que nos enfrentamos están:

La recesión económica

Es natural que a las personas les dé más miedo la inmigración cuando sube el paro. Les preocupa que los recién llegados les quiten el trabajo a los ciudadanos estadounidenses o compitan con ellos e impidan que suban los salarios. Además, las malas situaciones económicas suponen una presión presupuestaria para los gobiernos estatales y locales, y a los estadounidenses les preocupa que la inmigración signifique una sangría de los servicios públicos y tener que competir por unos recursos escasos.

E. J. Dionne demuestra en su análisis la importancia de las condiciones económicas para las opiniones sobre la inmigración. Sus investigaciones demuestran que en la última década, los puntos de vista están en gran medida relacionados con la tasa de desempleo nacional: el aumento del paro alimenta un sentimiento antiinmigración y su disminución alivia las tensiones.

"Es natural que a las personas les dé más miedo la inmigración cuando sube el paro. Les preocupa que los recién llegados les quiten el trabajo a los ciudadanos estadounidenses o compitan con ellos e impidan que suban los salarios."

La actual debilidad de la economía del país es un obstáculo fundamental. El producto nacional bruto de Estados Unidos cayó un 6,3% en el último trimestre del 2008 y otro 5,7% durante el primer trimestre del 2009. En el último año, la tasa de paro nacional ha aumentado del 4,5% al 8,9%. Basándonos únicamente en estas cifras, este año no parece ser un momento muy prometedor para realizar una reforma en materia de inmigración.

No obstante, las recesiones siempre terminan en algún momento y existen indicios prometedores de que la actual se está calmando. A medida que mejora nuestra economía, debemos prestar atención a la competitividad de Estados Unidos y a cómo contribuyen los inmigrantes en nuestra economía. Los inmigrantes gastan dinero en bienes y servicios, pagan sus impuestos y hacen trabajos que la mayoría de los ciudadanos americanos no quieren. Las universidades invierten millones en la formación de estudiantes extranjeros pero después los mandan a casa sin ninguna oportunidad laboral en Estados Unidos que pudiera sacar provecho de sus nuevos conocimientos.

Varias organizaciones de defensa legal comprenden la importancia que tienen los ciclos económicos en las actitudes acerca de la inmigración y han propuesto adaptar las políticas de inmigración en función de las condiciones laborales y económicas. Reconocen que es razonable reducir la inmigración cuando la economía se debilita e incrementarla cuando lo justifique el crecimiento económico. Esto representa un nuevo enfoque político que hace frente a las preocupaciones legítimas que tienen los estadounidenses en relación con la competencia por los puestos de trabajo y a la escasez de recursos.

Política particularista

En el pasado, los debates sobre la inmigración se vieron dificultados por un sistema político descentralizado estructurado alrededor de la receptividad política a distritos electorales y estados. La virtud de este sistema es que ralentiza el cambio político y garantiza que la legislación aprobada supere los estándares de las comunidades locales. Al mismo tiempo, no obstante, nuestra estructura institucional dificulta una reforma exhaustiva en cualquier cuestión política debido a la dificultad de conseguir coaliciones y navegar por un sistema político fragmentado.

En cuestión de inmigración, no existen atajos para superar el proceso legislativo, identificar y responder a las preocupaciones de los individuos, trabajar con presidentes de comités y subcomités y conciliar las leyes aprobadas por la Cámara y el Senado. No obstante, en otros temas polémicos el Congreso ha optado por una gestión institucional en la que sus miembros establecen unas políticas generales y las agencias administrativas se encargan de perfilar los detalles. Por ejemplo, los legisladores no suelen trazar los requisitos técnicos de las emisiones de radio y

televisión, sino que prefieren dejar ese tema a la Comisión Federal de Comunicaciones. De un modo similar, en la legislación relativa al medio ambiente, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente toma una gran cantidad de decisiones administrativas.

Dados los problemas técnicos implicados en la reforma de la inmigración y las virtudes de la despolitización del conflicto en este tema, algunas organizaciones de defensa legal han propuesto la creación de una Comisión Federal de Inmigración autorizada para tomar decisiones dentro de los límites de unos principios amplios enunciados por los legisladores. Dicha comisión no resolvería el tema a tratar actualmente en el Congreso en lo referente a cómo conseguir una reforma exhaustiva en materia de inmigración. No obstante, una vez los legisladores determinasen unos principios amplios, contar con una agencia independiente para ponerlos en práctica ayudaría a largo plazo a reducir las discusiones que rodean el debate cívico.

Una cobertura mediática disgregadora

La polarización de la cobertura mediática fue un problema fundamental en el último intento de conseguir una reforma exhaustiva en materia de inmigración. Según un estudio de Brookings realizado por el Miembro Senior No Residente Roberto Suro, la información mediática “desempeñó un papel muy directo en el recrudecimiento de la polarización en temas de inmigración”. La cobertura mediática dominante se centraba en la “ilegalidad”, lo cual contribuyó a infundir en el público una percepción negativa de la inmigración. La cobertura mediática aumentó en el 2006 y 2007, pero seguía siendo menor a la que se prestaba a otros temas importantes. En el 2007, por ejemplo, casi un 10,8% de las noticias se centraban en la campaña electoral del 2008, mientras que un 7,8% trataban sobre las políticas sobre Irak, un 5,9% sobre los acontecimientos sucedidos en Irak, un 2,9% sobre la inmigración, un 2,4% sobre Irán y un 2% sobre el terrorismo nacional. Según el análisis de Suro, “la inmigración recibió una atención cuatro veces mayor por parte de los participantes conservadores de los debates que de los liberales”, lo cual explica por qué las actitudes del público hacia la inmigración se volvieron más negativas y por qué creció la preocupación frente a los recién llegados.

Preocupación pública por la seguridad de las fronteras y el impacto social

Con unos 500.000 inmigrantes no autorizados entrando en Estados Unidos todos los años, existen preocupaciones legítimas en cuanto a la credibilidad del imperio de la ley así como a su impacto económico. No obstante, a la mayoría de los inmigrantes, legales o indocumentados, no se les permite participar en Medicaid, beneficiarse del Ingreso Suplementario de Seguridad, de vales para alimentos, de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o del Programa Estatal para el Seguro Médico

Infantil. Los inmigrantes no documentados no pueden recibir ninguna forma de asistencia social, sanidad pública o jubilación. Los residentes permanentes legales deben contribuir a Medicare y a la Seguridad Social durante al menos diez años antes de que puedan beneficiarse de dichos programas gubernamentales. Los niños nacidos en Estados Unidos, no obstante, pueden recibir ayudas gubernamentales dirigidas a los jóvenes.

En la educación encontramos una excepción a esta norma general. En base a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1982, *Plyler v. Doe*, los estados y municipios no pueden negar a los inmigrantes el acceso a la educación elemental o secundaria. Una ley de Texas de 1975 negaba la financiación educativa a aquellos niños que hubieran llegado ilegalmente al país y permitía a las escuelas locales no aceptar que dichos niños se matricularan. No obstante, en una votación cuyo resultado fue 5 a 4, el Tribunal Supremo dictaminó que esta ley violaba la 14ª Enmienda y que por ello era anticonstitucional. Las escuelas deben educar a los niños independientemente de si son residentes legales o ilegales de Estados Unidos.

Esa misma lógica es aplicable a la sanidad de urgencias. Se supone que las urgencias de los hospitales deben tratar a los pacientes aunque no puedan pagar por sus servicios o no sean residentes legales del país. Cualquier persona merece recibir cuidados de emergencia independientemente de si es pobre, indocumentada o carece de seguro médico. En realidad, no obstante, los individuos indocumentados suelen recibir una menor atención. Un estudio realizado en California por Alexander Oretaga descubrió que "los mexicanos y otros latinos indocumentados decían utilizar en menor medida los servicios de sanidad y recibían una atención peor en comparación con los estadounidenses".

Como la seguridad de las fronteras es una preocupación pública importante en relación con la inmigración ilegal en general y con la utilización de los recursos públicos en particular, los tomadores de decisiones deben considerar la utilización de nuevas tecnologías digitales que puedan ayudar a reforzar las fronteras. Los sensores remotos y monitores digitales podrían ayudar a identificar algunos puntos populares para cruzar la frontera y, de este modo, ayudar a los agentes de las Patrullas Fronterizas a poner freno a las entradas de inmigrantes ilegales.

Esas mismas tecnologías deben utilizarse para comprobar que los empleadores realmente comprueban la situación legal de sus futuros trabajadores antes de contratarlos. Sin un plan creíble para que se acate la ley, no podremos salvar los obstáculos que han frustrado la consecución de una reforma exhaustiva en materia de inmigración durante las dos últimas décadas.

Profunda desconfianza del gobierno por parte del público

El mayor cambio en la opinión pública desde los años cincuenta ha sido la creciente desconfianza del gobierno por parte del público. Hace cincuenta años, dos tercios de los americanos confiaban en que el gobierno hacía lo que debía. Hoy en día más de dos tercios desconfían del gobierno de Washington.

Esta desconfianza dominante tiene profundas consecuencias para la inmigración ya que, aunque las autoridades nacionales aprueben una reforma exhaustiva que haga cumplir la ley más estrictamente y que refuerce la seguridad de las fronteras, será difícil convencer a los ciudadanos de que el gobierno seguirá adelante y la pondrá en práctica de un modo eficaz. Debido al fracaso de las normas en materia de inmigración para contener la entrada de inmigrantes ilegales, a quienes se oponen a la inmigración les resulta fácil aprovechar el escepticismo del público y debilitar su apoyo a ciertas propuestas o compromisos. Cualquier intento de aprobar una reforma exhaustiva deberá tener en cuenta la arraigadísima naturaleza del cinismo de la opinión pública. Ninguna nueva forma de enfocar el tema tendrá éxito a menos que trate explícitamente este aspecto de la opinión ciudadana. Y este enfoque debe estar anclado en unas políticas que tengan unas posibilidades razonables de resultar eficaces.

Autores



Darrell M. West es vicepresidente y director de Estudios de Gobierno del Instituto Brookings.



Thomas E. Mann es miembro senior de Estudios de Gobierno en el Instituto Brookings y tiene la cátedra W. Averell Harriman en Gobierno Americano.

Acerca de la serie sobre inmigración de Brookings

La reforma de las políticas en materia de inmigración ha suscitado intensos debates y seguro que seguirá siendo así dentro del nuevo clima político. Esta serie presenta la obra de expertos de Brookings en varios campos y está diseñada para informar acerca del debate público sobre las políticas de inmigración. Nuestro objetivo es fomentar una nueva forma de pensamiento acerca de este tema tan importante y presentar nueva información que arroje luz sobre algunas de las preocupaciones y tendencias fundamentales relacionadas con la inmigración.

BROOKINGS

The Brookings Institution
1775 Massachusetts Ave., NW
Washington, DC 20036
202.797.6000
www.brookings.edu